

OEA/Ser.L/V/II  
Doc. 323  
8 diciembre 2023  
Original: español

**INFORME No. 299/23**  
**PETICIÓN 693-11**  
INFORME DE INADMISIBILIDAD

FRANKLIN VARGAS GONZÁLEZ  
COSTA RICA

Aprobado electrónicamente por la Comisión el 8 de diciembre de 2023.

**Citar como:** CIDH, Informe No. 299/23. Petición 693-11. Inadmisibilidad.  
Franklin Vargas González. Costa Rica. 8 de diciembre de 2023.

**I. DATOS DE LA PETICIÓN**

<b>Parte peticionaria:</b>	Adriana Vargas García y Arcelio Hernández Mussio
<b>Presunta víctima:</b>	Franklin Vargas González
<b>Estado denunciado:</b>	Costa Rica
<b>Derechos invocados:</b>	Artículos 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y retroactividad), 17 (protección a la familia), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos <sup>1</sup>

**II. TRÁMITE ANTE LA CIDH<sup>2</sup>**

<b>Presentación de la petición:</b>	19 de mayo de 2011
<b>Información adicional recibida durante la etapa de estudio:</b>	8 de agosto de 2012, 24 de octubre de 2012 y 30 de julio de 2015,
<b>Notificación de la petición al Estado:</b>	25 de octubre de 2016
<b>Primera respuesta del Estado:</b>	26 de octubre de 2018
<b>Observaciones adicionales de la parte peticionaria</b>	15 de enero de 2019, 16 de noviembre de 2021 y 28 de diciembre de 2022
<b>Observaciones adicionales del Estado:</b>	10 de noviembre de 2020

**III. COMPETENCIA**

<b>Competencia <i>Ratione personae</i>:</b>	Sí
<b>Competencia <i>Ratione loci</i>:</b>	Sí
<b>Competencia <i>Ratione temporis</i>:</b>	Sí
<b>Competencia <i>Ratione materiae</i>:</b>	Sí, Convención Americana (depósito del instrumento de ratificación realizado el 8 de abril de 1970)

**IV. DUPLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y COSA JUZGADA INTERNACIONAL, CARACTERIZACIÓN, AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN**

<b>Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional:</b>	No
<b>Derechos declarados admisibles:</b>	Ninguno
<b>Agotamiento de recursos internos o procedencia de una excepción:</b>	Sí, en los términos de la sección VII
<b>Presentación dentro de plazo:</b>	Sí, en los términos de la sección VII

**V. POSICIÓN DE LAS PARTES***Alegatos de la parte peticionaria*

1. La parte peticionaria denuncia que el señor Vargas Gonzalez no tuvo acceso a un recurso que le permita la revisión integral de su condena por el delito de violación y, debido a ello, habría podido cuestionar la indebida motivación de esta decisión. Asimismo, arguye que la integridad de la presunta víctima se encuentra en riesgo, debido que está encarcelado con personas que buscarían adoptar represalias en su contra.

<sup>1</sup> En adelante, "la Convención Americana" o "la Convención"

<sup>2</sup> Las observaciones de cada parte fueron debidamente trasladadas a la parte contraria.

2. Informa que el 18 de diciembre de 2006 el Tribunal de Juicio del Primero Circuito Judicial de Alajuela condenó al señor Vargas González a diez años de pena privativa de libertad por el delito de violación en perjuicio de una menor de edad. Afirma que, ante ello, la defensa de la presunta víctima presentó un recurso de casación, cuestionando que i) no se cumplió con realizar el examen mental obligatorio al señor Vargas González; y ii) que la sentencia no estaba adecuadamente fundamentada, pues contenía argumentos contradictorios. Sin embargo, el 16 de marzo de 2007 el Tribunal de Casación Penal desestimó tal acción, tras analizar ambos cuestionamientos y considerar que estos no demostraban la presencia de un error en la decisión de primera instancia que ameritase su nulidad. Esta decisión se notificó el 22 de marzo de 2007.

3. Agrega que a pesar de que el 9 de mayo de 2007 el señor Vargas Gonzalez inició un procedimiento de revisión de sentencia, reiterando sus cuestionamientos hacia su sentencia condenatoria, el 30 de noviembre de 2007 el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, desestimó sus alegatos.

4. Finalmente, informa que el 25 de febrero de 2011 el señor Vargas González presentó una demanda amparo, cuestionando su sentencia condenatoria. No obstante, el 8 de marzo de 2011 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desestimó la acción, al considerar que no podía revisar la validez de una sentencia penal, pues ello implicaría incidir indebidamente en el ámbito de competencia de la jurisdicción penal. En consecuencia, precisó que los reparos de la presunta víctima respecto a su condena debían plantearse en sede penal, por medio de los respectivos recursos y ante las instancias previstas para tal efecto.

5. Con base en estas consideraciones, el señor Vargas González considera que las autoridades Costa Rica no le garantizaron el acceso a un recurso de apelación que permita la revisión integral de su sentencia condenatoria. Asimismo, sostiene que su integridad física se encuentra en riesgo, dado que, debido a que ejerció funciones en el Ministerio de Seguridad Pública, se encuentra privado de su libertad con personas que tendrían interés en hacerle daño.

*Alegatos del Estado costarricense*

6. Por su parte, el Estado replica que la petición es inadmisibles por haber sido presentada extemporáneamente. Detalla que a pesar de que el 22 de marzo de 2007 las autoridades notificaron al señor Vargas Gonzalez la sentencia que desestimó su recurso de casación, la parte peticionaria recién presentó esta petición casi cuatro años después de ello. En consecuencia, a juicio de Costa Rica, resulta claro que no se cumple el requisito de plazo previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención.

7. Adicionalmente, arguye que la parte peticionaria no agotó los recursos de la jurisdicción interna. Destaca que en caso la presunta víctima hubiese considerado que su integridad física se encontraba en riesgo y que el Estado no estaba atendiendo tal situación, debió haber acudido a la jurisdicción constitucional y presentar un recurso de amparo o, también, un incidente de queja. Sin embargo, refiere que el señor Vargas González no empleó ninguna de tales vías, a pesar de que estas eran idóneas y efectivas para atender sus reclamos. En consecuencia, afirma que el presente asunto no cumple el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención.

8. Por último, Costa Rica plantea que los hechos alegados no caracterizan una violación de derechos humanos que le sea atribuible. Por el contrario, arguye que la parte peticionaria pretende que la Comisión actúe como una cuarta instancia judicial y revise las valoraciones de hecho y de derecho efectuadas por los jueces y tribunales internos que actuaron en la esfera de su competencia, sin demostrar que estos hayan vulnerado algún derecho reconocido en la Convención. En particular, destaca que el peticionario solo manifiesta su disconformidad con las decisiones internas, a pesar de que la vía de casación dio una respuesta integral a todos sus cuestionamientos.

## VI. CONSIDERACIONES PREVIAS

9. La Comisión observa que el objeto principal de la presente petición se centra en cuestionar la afectación al derecho a recurrir el fallo, contemplado en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. En razón a ello, dado que se han emitido distintas decisiones dentro del sistema interamericano sobre esta temática, en función de las modificaciones implementadas en la legislación procesal penal costarricense, la CIDH estima necesario realizar un recuento de estos pronunciamientos a efectos de identificar estándares que permitan resolver adecuadamente la presente petición.

10. Así, la CIDH recuerda que en la sentencia del caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica* del 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos<sup>3</sup> examinó la regulación establecida en el Código Procesal Penal vigente desde 1998; y concluyó que no contaba con “*un recurso que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior*”, dada las limitaciones que tenía la regulación del recurso de casación en el ámbito penal<sup>4</sup>. En consecuencia, la Corte IDH declaró que el Estado costarricense violó el artículo 8.2.h) de la Convención en relación con sus artículos 1.1 y 2 en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa, al no haber garantizado su derecho a recurrir el fallo; y ordenó a Costa Rica “*adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, en relación con el artículo 2 de la misma*”<sup>5</sup>.

11. Como consecuencia de esta sentencia, Costa Rica reformó la regulación de su sistema procesal penal a efectos de contar con una regulación acorde con las obligaciones contempladas en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. Así, el 6 de junio de 2006 entró en vigor la Ley No. 8503, denominada “Ley de Apertura de la Casación Penal”, la cual modificó y adicionó distintos artículos del Código Procesal Penal relacionados con los recursos de casación y revisión. Asimismo, tal legislación estableció en su Transitorio I, un procedimiento de revisión especial para “*las personas condenadas por un hecho delictivo con fecha anterior a esta Ley, a quienes se les haya obstaculizado formular recurso de casación contra la sentencia, en razón de las reglas que regulaban su admisibilidad en aquella fecha [...] invocando, en cada caso, el agravio y los aspectos de hecho y de derecho que no fueron posibles de conocer en casación*”. En virtud de ello, la Corte Interamericana consideró que “*a través de la causal de revisión creada por el Transitorio I, una persona condenada penalmente podría, en principio, obtener una revisión integral de su sentencia que incluya tanto cuestiones de hecho como de derecho*”<sup>6</sup>.

12. Asimismo, y en lo relevante para el presente caso, la citada ley incorporó diversas modificaciones al régimen legal del recurso de casación contenido en el Código Procesal Penal. En primer término, se adicionó a la nómina de vicios de la sentencia que justifican la casación del art. 396 una nueva causal consistente en que “la sentencia no haya sido dictada mediante el debido proceso o con oportunidad de defensa”. En segundo lugar, y con respecto a la amplitud del examen del tribunal de casación, la ley 8503 incorporó el artículo 449 bis al Código Procesal Penal, el cual reza:

El Tribunal de Casación apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. De no tener registros suficientes para realizar esa apreciación, podrá reproducir en casación la prueba oral del juicio que, en su criterio, sea necesaria para examinar la procedencia del reclamo, y la valorará en relación con el resto de las actuaciones.

De igual manera, podrá valorar en forma directa la prueba que se haya introducido por escrito al juicio.

<sup>3</sup> En adelante, la “Corte Interamericana” o la “Corte IDH”.

<sup>4</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 167.

<sup>5</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 198.

<sup>6</sup> Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 262.

13. Adicionalmente, tanto la Comisión como la Corte IDH también constataron que el 9 de junio de 2010 se publicó la Ley No. 8837, denominada “Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal”, vigente a partir del 9 de diciembre de 2011; la cual creó y reguló el recurso de apelación. Además, el Transitorio III de dicha norma reguló dos supuestos adicionales: i) para las personas cuyas sentencias estaban firmes para el momento de entrada en vigencia de la ley, se estableció que pueden interponer, por única vez, un procedimiento de revisión en los primeros seis meses; y ii) para las personas cuyos recursos de casación se encontraban pendientes de resolución al momento de la entrada en vigencia de la ley, se estableció que podían solicitar la conversión del recurso de casación ya presentado a uno de apelación conforme a la nueva norma.

14. Como consecuencia de las citadas modificaciones, en la sentencia del caso *Amrhein y otros vs. Costa Rica* del 25 de abril de 2018, la Corte Interamericana evaluó nuevamente la regulación procesal penal costarricense; y amplió sus criterios jurídicos tanto respecto al agotamiento de la jurisdicción interna, como al análisis de fondo de casos sobre la misma temática.

15. En relación con el primer punto, la Comisión destaca que, en el citado caso, la Corte IDH consideró que las presuntas víctimas debieron haber interpuesto el recurso de revisión especial con base en el Transitorio I de la Ley 8503 de 2006 durante el trámite de admisibilidad de la petición, pues estaba destinado específicamente a personas con condenas ya en firme; y por ello, “*el hecho de que se trataría de un recurso extraordinario no puede ser determinante, per se, para concluir su ineffectividad*”. En consecuencia, siguiendo la citada jurisprudencia, la Comisión considera que a efectos de determinar la admisibilidad de un asunto sobre esta temática debe determinar si la citada vía recursiva estuvo a disposición de las presuntas víctimas tras la emisión de su condena, y de ser este el supuesto, verificar si agotaron o no tal recurso.

16. Finalmente, a efectos del análisis de caracterización de las peticiones, la Comisión nota que la Corte Interamericana concluyó en la citada sentencia que no correspondía “*declarar una violación al artículo 2 de la Convención Americana por la forma en que está regulado el sistema recursivo costarricense, ni por la forma en que dicho Estado atendió la situación de personas cuyas sentencias ya estaban en firme con anterioridad a la vigencia de las Leyes 8503 y 8837, ya que, a través de dichas reformas, subsanó las deficiencias en la aplicación de las normas recursivas [...]*”<sup>8</sup>. Asimismo, recuerda que en la resolución de supervisión de cumplimiento del 22 de noviembre de 2010 del caso *Herrera Ulloa vs. Costa Rica*, el Tribunal valoró positivamente las reformas introducidas en la legislación procesal penal; y en virtud de tales modificaciones concluyó que “*al garantizar la posibilidad de un amplio control de la sentencia emitida por un tribunal de juicio en materia penal a nivel interno*”<sup>9</sup>, Costa Rica había cumplido con adecuar su legislación interna.

17. Sin perjuicio de ello, la Comisión destaca que las citadas normas reconocieron a aquellas personas cuyas sentencias condenatorias ya habían adquirido calidad de cosa juzgada la posibilidad de interponer un procedimiento de revisión, aunque supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos. En el caso de la ley 8503, la Comisión destaca que se exigía que el recurrente invoque en su presentación “*el agravio y los aspectos de hecho y derecho que no fueron posibles de conocer en casación*”. Por su parte, el Transitorio III de la ley 8837 demandaba para la procedencia del procedimiento de revisión que el condenado “*haya alegado con anterioridad la vulneración del artículo 8.2.h de la Convención*”.

18. En tal sentido, la Comisión reafirma que la manera en que se encontraba regulado el procedimiento de revisión establecido por el Transitorio I de la ley 8503 podía generar limitaciones en términos de la accesibilidad del recurso, y, en consecuencia, no garantiza en sí mismo el derecho a la revisión integral del fallo condenatorio a todos aquellos que fueron condenados durante la vigencia del texto originario del Código Procesal Penal<sup>10</sup>. Idéntica conclusión cabe realizar respecto del recurso de revisión consagrado en

<sup>7</sup> Corte IDH. Caso *Amrhein y otros Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 48.

<sup>8</sup> Corte IDH. Caso *Amrhein y otros Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354, párr. 265.

<sup>9</sup> Corte IDH. Caso *Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2010, párr. 16.

<sup>10</sup> CIDH. Informe No. 33/14. Caso 12.820. Fondo. *Manfred Amrhein y otros*. Costa Rica. 4 de abril de 2014. Párr. 217 a 220.

el Transitorio III de la ley 8837, toda vez que la norma incluía la exigencia de haber alegado previamente la vulneración del derecho al recurso como un requisito de procedibilidad del recurso de revisión.

19. No obstante, la Comisión reconoce, en primer término, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se refirió en reiterados pronunciamientos a la necesidad de “asegurar el derecho al recurso, excluyendo formalismos que impidieran la revisión de las sentencias de condena, a fin de satisfacer lo dispuesto por el artículo 8.2.h de la Convención”<sup>11</sup>.

20. Asimismo, la CIDH considera que, a pesar de los obstáculos a la procedencia del recurso incorporados en la redacción del Transitorio I de la ley 8503, el recurso de revisión allí reconocido significó una oportunidad adicional al recurso de casación para que una persona condenada pudiera obtener una revisión integral de su sentencia. Dicha revisión integral dependía, en esencia, de la forma en que los jueces de los tribunales de alzada interpretaban las normas procesales vigentes a la luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, del artículo 8.2.h de la Convención Americana y de lo decidido por la Corte IDH en el caso *Herrera Ulloa*.

21. En particular, y en línea con lo decidido por la Corte, la Comisión observa que, teniendo en cuenta que tales modificaciones legislativas al sistema recursivo costarricense fueron adoptadas como resultado de los pronunciamientos de los órganos del Sistema Interamericano de derechos humanos, resulta razonable como causal de admisibilidad del recurso que los interesados deban invocar los posibles errores que hubiera podido cometer el juez o tribunal de la instancia inferior.

22. En consecuencia, teniendo en cuenta las especificidades existentes respecto de este tema en el sistema costarricense, como resultado de las sentencias dictadas por el Sistema Interamericano, y concretamente con lo señalado por la Corte IDH en el caso “Amrhein”, la Comisión considera que no resulta apropiado realizar una evaluación en abstracto de cada uno de los recursos disponibles en la legislación procesal penal, sino que se debe efectuar “un análisis, caso por caso, de los recursos efectivamente interpuestos por las presuntas víctimas a fin de determinar si la forma en que éstos fueron resueltos en el sistema recursivo costarricense, tomando en cuenta sus reformas, respetaron el derecho de aquellas a una revisión integral de sus sentencias condenatorias”<sup>12</sup>. Lo que en principio requiere de un análisis de fondo por parte de la CIDH, salvo que de la información de las partes se observe que los hechos planteados por el peticionario no caractericen *prima facie* violaciones a la Convención Americana, en los términos de su artículo 47.

## VII. ANÁLISIS DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

23. La Comisión observa que el 16 de marzo de 2007 el Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso de casación presentado por la presunta víctima contra su sentencia condenatoria de primera instancia. Tras ello, la Comisión destaca que el señor Vargas González presentó tanto un procedimiento de revisión, como una acción de amparo, cuestionando aspectos relacionados con su derecho a recurrir el fallo condenatorio, pero tanto el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela como la Sala Tercera de la Corte Suprema rechazaron estas acciones el 30 de noviembre de 2007 y el 8 de marzo de 2011, respectivamente.

24. En consecuencia, toda vez que Costa Rica no cuestiona el agotamiento de los recursos internos respecto a este extremo de la petición, la Comisión considera que las autoridades internas tuvieron la oportunidad de solventar la situación denunciada mediante sus mecanismos internos y, por ende, se cumple el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención Americana. Asimismo, dado que la resolución del recurso de amparo se produjo cuando el presente asunto se encontraba bajo estudio de admisibilidad, la Comisión concluye que también se cumple el requisito de plazo previsto en el artículo 46.1.b) de la Convención.

25. Finalmente, en relación con los alegatos referidos a un presunto riesgo a la integridad personal del señor Vargas González, la Comisión nota que la parte peticionaria no informa que la presunta víctima haya

<sup>11</sup> Corte IDH. *Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354. Párr. 260.

<sup>12</sup> Corte IDH. *Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354. Párr. 266.

utilizado alguna vía para cuestionar tal situación ni tampoco alega que aplique alguna excepción al requisito del previo agotamiento de la jurisdicción interna. Por ende, la Comisión considera que el presente extremo de la petición no cumple el requisito previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención.

### VIII. ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS HECHOS ALEGADOS

26. La Comisión recuerda que el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía es una de las garantías mínimas que tiene toda persona sometida a una investigación y proceso penal. Su finalidad es asegurar la revisión de una sentencia adversa de manera tal de que se tenga la posibilidad de corregir decisiones judiciales contrarias a derecho y evitar que una decisión injusta adquiera calidad de cosa juzgada<sup>13</sup>. En esa línea, la Comisión reitera que resulta irrelevante para el derecho internacional de los derechos humanos la denominación o el nombre con el que se designe el recurso disponible<sup>14</sup>. Lo importante es que el recurso contemplado en la normativa interna satisfaga una serie de estándares y, en tal sentido, cumpla con ser oportuno<sup>15</sup>, accesible<sup>16</sup>, eficaz<sup>17</sup> y, en particular, que permita la revisión integral de la condena<sup>18</sup>.

27. En torno a este último punto, la Comisión Interamericana indicó en el caso Abella respecto de Argentina:

[E]l artículo 8.2.h se refiere a las características mínimas de un recurso que controle la corrección del fallo tanto material como formal. En este sentido, desde un punto de vista formal, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, a que se refiere la Convención Americana, debe en primer lugar proceder [...] con la finalidad de examinar la aplicación indebida, la falta de aplicación o errónea interpretación, de normas de Derecho que determinen la parte resolutive de la sentencia. La Comisión considera, además, que, para garantizar el pleno derecho de defensa, dicho recurso debe incluir una revisión material en relación a la interpretación de las normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa, cuando hayan producido nulidad insanable o provocado indefensión, así como la interpretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de las mismas<sup>19</sup>.

28. En esa línea, la CIDH ha destacado que, si bien el derecho a recurrir no implica necesariamente un nuevo juicio o una nueva audiencia, siempre que el tribunal que realiza la revisión no esté impedido de estudiar los hechos de la causa, resulta necesario a la luz del artículo 8.2.h de la Convención que exista la posibilidad de señalar y obtener respuesta sobre errores que hubiera podido cometer el juez o tribunal de la instancia inferior. Ello significa que no resulta posible excluir del ámbito del recurso ciertas categorías como las cuestiones de índole fácticas, la manera en que se incorporaron de las pruebas al proceso y la valoración que los magistrados de la instancia inferior hicieron de ellas. La forma y los medios a través de los cuales se realice la revisión dependerán de la naturaleza de las cuestiones en debate, así como de las particularidades del sistema procesal penal de los respectivos Estados<sup>20</sup>.

<sup>13</sup> Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. Párr. 158 a 161; Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260. Párr. 242.

<sup>14</sup> Corte IDH., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 165; ONU, Comité de Derechos Humanos. Gómez Vázquez v. España. Comunicación No. 701/1996. Decisión de 11 de agosto de 2000, párr. 11.1.

<sup>15</sup> Corte IDH., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158

<sup>16</sup> Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 90.

<sup>17</sup> Corte IDH. Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de abril de 2018. Serie C No. 354. Párr. 272 a 274.

<sup>18</sup> Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Serie C No. 279. Párr. 270.

<sup>19</sup> CIDH. Informe No. 55/97. Caso 11.137. Fondo. Juan Carlos Abella. Argentina. 18 de noviembre de 1997. Párr. 261.

<sup>20</sup> CIDH, Informe No. 172/10, Caso 12.561, Fondo, César Alberto Mendoza y otros (Prisión y reclusión perpetuas de adolescentes), Argentina, 2 de noviembre de 2010, párr. 189.

29. Con base en las citadas consideraciones, en el presente asunto la Comisión observa que el 18 de diciembre de 2006 el Tribunal de Juicio del Primero Circuito Judicial de Alajuela condenó a la presunta víctima por el delito de violación. Frente a ello, la presunta interpuso un recurso de casación, cuestionando que i) no se cumplió con realizar el examen mental obligatorio al señor Vargas González; y ii) que la sentencia no estaba adecuadamente fundamentada, pues contenía argumentos contradictorios. Sin embargo, el 16 de marzo de 2007 el Tribunal de Casación Penal desestimó sus alegatos, al considerar que el fallo de primera instancia estuvo debidamente motivado.

30. Al respecto, a partir de la lectura del texto de esta última resolución, la Comisión considera que el Tribunal de Casación Penal analizó detenidamente cuestionamientos de la presunta víctima y brindó una respuesta motivada respecto a cada uno. En ese sentido, la Comisión aprecia que el tribunal ingresó en el análisis de cuestiones probatorias y actividades procesales realizadas a lo largo del proceso, de acuerdo con lo solicitado por la defensa del señor Vargas González. Por ende, la Comisión considera que, *prima facie*, no se han presentado argumentos o pruebas que permitan identificar alguna restricción o limitación que hayan evitado un análisis integral de los cuestionamientos planteados por la presunta víctima contra su fallo condenatorio de primera instancia.

31. Sin perjuicio de ello, la Comisión nota que, a partir de la interposición de un procedimiento de revisión, la presunta víctima volvió cuestionar la valoración probatoria utilizada para condenarlo, provocando que el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela vuelva a analizar y desestimar este reclamo. En tal sentido, a juicio de la Comisión, este mecanismo brindó una segunda oportunidad al señor Vargas Gonzalez para que se puedan analizar debidamente sus reclamos, sin que se aprecie la presencia de algún error o limitación en el examen realizado por este tribunal en la resolución del procedimiento de revisión. Por consiguiente, la CIDH concluye que, *prima facie*, no se han aportado elementos que permitan identificar una posible vulneración al derecho contemplado en el artículo 8.2.h) de la Convención.

## **IX. DECISIÓN**

1. Declarar inadmisibile la presente petición; y
2. Notificar a las partes la presente decisión; y publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 8 días del mes de diciembre de 2023. (Firmado): Esmeralda Arosemena de Troitiño, Primera Vicepresidenta; Julissa Mantilla Falcón, Stuardo Ralón Orellana, Carlos Bernal Pulido y José Luis Caballero Ochoa, miembros de la Comisión.